



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-004-2015-01683-01
Demandante:	Gabriela Giraldo de Gil
Demandado:	Colmena Seguros S.A.
Interviniente:	Sulma Nancy Soto Agudelo
Asunto:	Apelación sentencia
Procedencia:	Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Pensión de sobrevivientes, compañera permanente, dependencia económica padres.

Medellín, marzo veintinueve (29) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO con ausencia justificada y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la interviniente, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín,

el 8 de septiembre de 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora GABRIELA GIRALDO DE GIL en contra de COLMENA SEGUROS S.A., proceso al cual fue vinculada como interviniente la señora SULMA NANCY SOTO AGUDELO. Radicado 05001-31-05-004-2015-01683-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora GABRIELA GIRALDO DE GIL convocó a juicio a COLMENA SEGUROS S.A., pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, causada por la muerte de su hijo Luis Obed Giraldo Gil, con el correspondiente retroactivo pensional y los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso que el señor Luis Obed Gil Giraldo, quien es hijo de la señora Gabriela Giraldo de Gil y del señor José Nahum Gil Largo, falleció el 13 de enero de 2014 por causas de origen profesional, mientras laboraba al servicio de Glym S.A.S., sin dejar cónyuge, compañera permanentes o hijos.

Se narró que la señora Gabriela Giraldo de Gil, reclamó la pensión de sobrevivientes el 16 de abril de 2014, toda vez que dependía económicamente de su hijo, sin embargo, Colmena Seguros de Vida, negó la prestación aduciendo que la solicitante tenía independencia económica, por tener a su nombre varios terrenos, situación que carece de fundamento y se aleja de la realidad, pues el señor José Nahum Gil vendió los lotes de terreno al señor José Reinaldo Sánchez, el 5 de marzo de 1988, mediante contrato privado de promesa de compraventa, señalando que el señor José Nahum Gil Largo falleció en marzo de 1994, sin que el negocio quedara finiquitado, a razón de

que el comprador solo dio un primer abono y quedó debiendo la mayoría, pero desde el momento de la promesa de compraventa el comprador tenía la posesión material de los lotes.

Continuó relatándose, que, por recomendación de profesional del derecho, la demandante y sus hijos abrieron sucesión del señor José Nahum Gil, donde algunos de los predios figuran a nombre de la demandante, pero en la realidad, ni esta, ni sus hijos se lucran de los mismos desde marzo de 1988, ya que no se ostenta la tenencia material del bien, acotándose que la actora y sus hijos solo son propietarios de una pequeña casa en Riosucio, Caldas, propiedad en la que vive sola y en condiciones muy precarias.

1.2.- CONTESTACIÓN

Al dar respuesta a la demanda, **COLMENA SEGUROS S.A.** admitió como cierta la fecha de fallecimiento del señor Luis Obed Gil Giraldo, que la demandante solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, prestación que Colmena se abstuvo de reconocer, lo que es diferente a una negación, señalando que no es cierto que la actora dependía económicamente de su hijo, pues ARL Colmena designó una firma para verificar las situaciones de la presunta beneficiaria, evidenciándose que el afiliado fallecido devengaba al servicio de su empleador un salario mínimo, salario que se encontraba afectado por las deducciones y aportes a seguridad social, los gastos propios de convivencia con la señora Sulma Nancy Soto y sus propios gastos personales, lo que hace insostenible señalar que con tan exiguo ingreso y considerables egresos, la demandante dependiera del fallecido, además, la demandante es propietaria de cinco (5) inmuebles rurales en el municipio de Riosucio, generadores de renta e ingresos para la demandante y tuvo otros cinco (5) hijos que colaboraban con su sostenimiento, y sostuvo no constarle los demás hechos.

A su vez, propuso las excepciones que denominó: inexistencia de derecho en favor de la demandante; inexistencia de la obligación; falta de legitimación en la causa por pasiva; buena fe; prescripción; improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios y la genérica o innominada.

1.3.- DEMANDA DE INTERVENCIÓN

La señora SULMA NANCY AGUELO, citada al proceso como interviniente, presentó demanda, por medio de la cual busca se condene a COLMENA S.A., a reconocer y pagar a partir del 13 de enero de 2014, la pensión de sobrevivencia por la muerte de su compañero permanente Luis Obed Giraldo Gil, con los intereses moratorios estipulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación.

Como sustento de tales pedimentos, y en adición a lo informado en la demanda inicial, se expuso que el señor Luis Obed Giraldo Gil, convivió en una relación estable en calidad de compañeros permanentes con la señora Sulma Nancy Soto Agudelo, desde el 18 de septiembre de 2010, hasta mediados de marzo de 2013, compartiendo las responsabilidades propias del hogar, radicando su domicilio en la casa de la señora Gabriela Giraldo de Gil, después fijaron la residencia en un inmueble de propiedad de Alex de los Ríos, posteriormente en un inmueble del señor Duvan de Jesús Villada, en el municipio de Tumbabarreto y luego en el barrio San Rafael de Medellín.

Explicando que, a mediados de marzo de 2013, y por motivos netamente económicos, la pareja se vio obligada a fijar sus domicilios en forma separada, pero se seguían frecuentando habitualmente, a la medida que se los permitían las circunstancias económicas. Se resaltó que, en formato de hoja de vida para solicitud de empleo del 27 de febrero de 2012, el señor Luis Obed Gil Giraldo, consignó como estado civil unión libre, referenciado como compañera

permanente a la señora Sulma Nancy Soto, calidad que también fue informada en el formato de inscripción del trabajador y/o personas a cargo de Comfenalco y en la información personal que dio al empleador GLYM S.AS.

1.4.- CONTESTACIÓN DEMANDA DE INTERVENCIÓN

Al replicar la demanda, **COLMENA SEGUROS S.A.**, refirió que no le consta la convivencia entre el afiliado fallecido y la señora Sulma Nancy Soto, destacando que la señora Gabriela Giraldo, se presentó a la compañía aduciendo ser la única beneficiaria de las prestaciones derivadas del fallecimiento de su hijo, afirmando que en cualquier caso, la presunta convivencia no cumple con el requisito legal de antigüedad, para ser tenida como beneficiaria de la pensión y adujo no cónstale los demás hechos.

En oposición a las súplicas de la demanda formuló las excepciones de inexistencia de derecho en favor de la demandante; inexistencia de la obligación; falta de legitimación en la causa por activa; temporalidad de la eventual pensión; buena fe; prescripción; improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios; aplicación de las deducciones previstas en la ley y la innominada o genérica.

Por su parte, la señora **GABRIELA GIRALDO DE GIL**, indicó que no es cierto lo relacionado a la convivencia aducida en la demanda, por cuanto el causante y la señora Sulma Nancy Soto, tuvieron una relación sentimental y llegaron a convivir, pero por poco tiempo, no siendo cierto que la pareja se hubiera separado por cuestiones económicas, existiendo separación porque terminó la relación sentimental que tuvieron, destacando que en el último año de vida del causante, este vivió solo en una residencia ubicada en el municipio de Caldas, no siendo cierto que la interviniente sea beneficiaria de la pensión

de sobrevivencia, en tanto no alcanzó a convivir con el causante el tiempo legal, razón por la cual, se opone a las pretensiones.

1.5 SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 8 de septiembre de 2022, el Juzgado de conocimiento declaró que la demandante Gabriela Giraldo de Gil no probó dependencia económica de su hijo Luis Obed Giraldo, fallecido por causa de origen laboral el 13 de octubre de 2014. Igualmente, declaró que la interviniente en exclusión Zulma Nancy Soto Agudelo, no acreditó convivencia superior a 5 años con el causante como compañera permanente, absolviendo a Colmena S.A., de todas las pretensiones, imponiendo condena en costas a las vencidas en juicio.

1.6.- RECURSO DE APELACIÓN

Demandante.

El apoderado de la activa expresa su disenso con el fallo, resaltando que el despacho fundamenta la decisión de la falta de prueba de dependencia económica, basado en supuestos e indicios, como que los predios rurales a nombre de la demandante, tienen alguna explotación económica, y no se prueba que se perciban ingresos económicos por esos terrenos, adquiridos por sucesión del primer esposo, reitera que esos terrenos habían sido vendidos en el año 1988 y de ahí en adelante la actora no volvió a usufructuarlos.

Refirió que el juzgado supone que porque la demandante se volvió a casar en octubre del 1999, podía haber dependido del nuevo esposo, cuando la existencia del cónyuge no se estableció en el proceso y la demandante afirma que la convivencia con él fue muy corta porque no se entendieron, igualmente

reprocha que el despacho sostiene que la prueba acredita que el causante devengaba el mínimo legal porque así lo dice la liquidación y los aportes a la seguridad social, situación que aunque fuera cierta no desvirtúa una dependencia económica, como tampoco la existencia de otros hijos, especialmente dos o tres profesionales, que se presume también colaboraban en la manutención de la mamá, dado que la dependencia económica, no tiene que ser total y absoluta.

Adujo que para el juez la reclamación de las prestaciones sociales por parte de la actora y la apertura de cuenta de ahorros en la cual no había consignaciones del causante, implica que estaba bien económicamente y que no había aporte, no obstante, asegura que no quedó probado cuando se abrió la cuenta lo cual ocurrió después de la muerte del causante. Igualmente, aduce que el hecho que el demandante no viviera con la mamá tampoco tiene la trascendencia para desvirtuar una dependencia económica, porque la norma no exige que los padres vivan con el hijo.

Agrega que, aunque el causante para el 2012 viviera en Medellín Zulma, en el barrio Guayabal, ello no impide que velara por su mamá, él siempre estuvo pendiente de la mamá, así quedó establecido con las declaraciones de José Nahún y de Luz Nelida Atehortúa, conocedores directos. En cuanto a la tacha de los testigos, expone que se le olvida al despacho que las tachas no pueden ser objetivas, tenía que demostrarse el interés de torcer la verdad de cada una de estas personas y ellos contestaron de forma espontánea, hasta se encomendaron a dios cuando declararon.

Cita la sentencia C111 de 2006 de la Corte Constitucional y SL-213 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia, en la cual citan las sentencias SL-400 de 2013,

816 de 2013, 2800 de 2014, la 3630 de 2014, 6690 de 2014, 4923 de 2014 y en la SL-1804 de 2018.

Finalmente, sostuvo que Colmena no cumplió con la carga probatoria de probar la independencia económica solo afirmó que por los bienes que aparecen a nombre de la accionante y por una tienda que tuvo en el pueblo, que aclara, realmente, era una venta de cigarrillos y gaseosas que no generaba mayores ingresos, no había dependencia siendo ello acogido por el juez, refiere que se pidió desde la demanda la ratificación de la investigación administrativa conforme al artículo, 262 del CGP, y no se trajo investigador al proceso.

Interviniente

Manifestó el apoderado que las pruebas documentales y testimoniales dan pie, sin margen de duda, a acreditar que la señora Sulma Nancy era la compañera permanente del causante, que dependía económicamente de él, que si vivieron juntos por el término exigido por la ley, siendo la muerte del causante el único motivo por el cual ellos se separaron, en ningún momento el despacho, cuestionó la declaración de la señora Patricia, que fue quien sustentó el dicho de la señora Sulma Nancy, no se pronunció sobre si eran compañeros permanentes o había una dependencia económica, el hecho que el causante no le haya quitado la calidad de beneficiaria como quedó plasmado en la prueba aportada por Comfenalco, quiere decir que no hubo rompimiento.

Asevera que, en el devenir de este proceso, se pudo visualizar que señora Gabriela ocultó a la compañera permanente para poder lucrarse de ese silencio y así no disputarse la pensión. Señaló que el juzgado no tuvo en cuenta los testimonios ni las pruebas que se aportaron que le dan la calidad de compañera permanente a la señora Sulma Nancy, hizo caso omiso de las declaraciones de la señora Patricia a quien el mismo causante le manifestó que

no había un rompimiento entre la pareja, desconociendo porque el juzgado aceptó la tesis de que había un rompimiento, cuando no lo hubo, agregando que la separación no fue voluntaria, si bien estaban de lado a lado en la ciudad, ellos continuaban en su relación y el seguía aportando.

Por último, anotó, que comparte la decisión del juez de desconocer el derecho de la madre del causante, porque se pudo demostrar su mala fe en ocultar a la señora Sulma Nancy y considera injusta la condena en costas a su mandante en la suma de \$800.000, por tratarse de una persona desempleada, que vive de la caridad de las personas.

1.7.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, no se pronunció ninguna de las partes.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que el señor Luis Obed Gil Giraldo, quien era hijo de los señores Gabriela Giraldo de Gil y José Nahúm Gil, falleció el 13 de octubre de 2014, conforme al registro civil de nacimiento y registro civil de defunción, visibles a folio 45 y 47 del expediente digital.
- Que el evento en el cual perdió la vida el señor Luis Obed Gil Giraldo, fue de origen laboral, tal y como lo reconoció Colmena S.A.
- Que el padre del causante José Nahúm Gil Largo, falleció el 28 de marzo de 1994, véase folio 48 del expediente digital.
- Que la señora Gabriela Giraldo de Gil, solicitó a Colmena Seguros S.A., el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, recibiendo respuesta negativa mediante comunicación del 19 de mayo de 2014, así se desprende del documento obrante a folio 53 a 55 del expediente digital.
- Que la demandante contrajo segundas nupcias el 9 de octubre de 1999, tal y como da cuenta la partida de matrimonio que milita a folios 179 del expediente digital.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Incumbe a la Sala determinar:

¿Si debe revocarse la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar, condenar a Colmena Seguros S.A., al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivencia con ocasión del

fallecimiento del señor Luis Obed Gil Giraldo, verificando inicialmente, si la señora Sulma Nancy Soto Agudelo ostenta la calidad de beneficiaria como compañera permanente del causante y en caso negativo, si dicha condición de beneficiaria la tiene la señora Gabriela Giraldo de Gil, madre del afiliado fallecido?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, ni la señora Sulma Nancy Soto Agudelo ni la señora Gabriela Giraldo de Gil, tienen la calidad de beneficiarias de la pensión de sobrevivencia, teniendo en cuenta que la primera, no convivía con el causante para el momento del deceso y no acredita un tiempo mínimo de convivencia de 5 años y la segunda, no acredita la dependencia económica respecto de su hijo fallecido Luis Obed Gil Giraldo. En consecuencia, la sentencia debe ser CONFIRMADA.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

En voces de la Corte Constitucional “ *El derecho a la pensión de sobrevivientes es “(...) la garantía que le asiste al grupo familiar de una persona que fallece siendo afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, para reclamar la prestación que se causa precisamente con tal deceso”⁴. De otro lado, el derecho a la sustitución pensional le asiste al grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez, para reclamar, ahora en su nombre, la prestación que recibía el causante. Debe enfatizarse en que, pese a la distinción nominal entre la pensión de sobrevivientes propiamente dicha y la sustitución pensional, la jurisprudencia constitucional se ha referido en múltiples oportunidades al propósito que comparten ambas. Al respecto, la Corte señala que “busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento”. Asimismo, esta prestación social “suple la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado del grupo familiar con*

el fin de evitar que su muerte se traduzca en un cambio radical de las condiciones de subsistencia mínimas de los beneficiarios de dicha prestación” (sentencia SU 141 de 2021).

Como lo ha precisado de tiempo atrás la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido, por regla general, a la luz de la normatividad vigente a la fecha del óbito del afiliado o pensionado, entre otras véase sentencias CSJ SL 36135 del 10 Jun 2009, SL 42828 del 1º Feb 2011, SL 7358 (46780) del 23 jun 2014 y más reciente la sentencia SL 529 de 2021.

En esta dirección el artículo 11 de la Ley 776 de 2002, señala “*MUERTE DEL AFILIADO O DEL PENSIONADO POR RIESGOS PROFESIONALES. Si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y su reglamentario*”

A su vez el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 del 2003, vigente para la fecha del fallecimiento del señor Luís Obed Gil Giraldo, enlista los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, así:

ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).”

(...)

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este.”

2.6.- CASO CONCRETO

En el sublite, no hay controversia en torno a que el evento en el cual perdió la vida el señor Luís Obed Gil Giraldo, fue de origen profesional, siendo el punto neural de discusión, determinar en primer lugar, atendiendo al orden de beneficiarios determinado en el ya citado artículo 47 de la Ley 100 de 1993, con la modificación introducida por la Ley 797 de 2003, si la señora Sulma Nancy Soto Agudelo, ostentaba la calidad de compañera permanente del causante y si acredita el término mínimo de convivencia exigida para hacerse acreedora de la prestación deprecada judicialmente, de no acreditar la calidad de beneficiaria, establecer si señora Gabriela Giraldo de Gil, dependía económicamente de su hijo Luís Obed Gil Giraldo.

Se precisa que si bien la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL 1730 del 3 de junio de 2020, MP Jorge Luis Quiroz Alemán, atendiendo a su nueva integración, modificó su propio precedente, señalando, que tratándose del fallecimiento del afiliado, no es exigible al cónyuge o compañera permanente, acreditar la convivencia de cinco años, pues dicha exigencia, solo aplica en los eventos en que fallece un pensionado, tal providencia fue dejada sin efecto

jurídico por la Corte Constitucional, en sentencia SU 149 del 2021, al revisar una acción de tutela interpuesta contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, considerando el tribunal constitucional que la convivencia mínima requerida para ostentar la calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes es de cinco años, con independencia si el causante es un afiliado o un pensionado, advirtiendo que en la sentencia referida, se desconoció el principio de igualdad y de sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Esta Sala de Decisión halla razonable la valoración del ente guardián de la Constitución, pues ninguna justificación encuentra el trato diferencial frente a los beneficiarios de la prestación, cuya calidad no depende de la condición que ostentaba el causante frente al sistema. De otra parte, las relaciones que protege el régimen pensional son aquellas respecto a las cuales se predica el ánimo permanente y estable de conformar una familia, frente a lo cual resulta relevante el término de convivencia.

Aunado a lo anterior, las decisiones emitidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencias de unificación, tienen carácter vinculante y son de obligatorio cumplimiento, *“En materia de acción de tutela, también se ha indicado que la obligatoriedad del precedente recae en la ratio decidendi, norma que sustenta la decisión en el caso concreto y se prefigura como una prescripción que regulará los casos análogos en el futuro. En esos trámites, se realiza una interpretación y aplicación correcta de una norma superior, es decir, de los derechos fundamentales. No puede perderse de vista que en esa labor se fija el contenido y alcance de las disposiciones superiores, aspecto que hace parte del imperio de la ley reconocido en el artículo 230 de la Constitución. Aunado a lo anterior, la obligatoriedad de los fallos de tutela se desprende del principio de igualdad, pues es una forma de evitar que los jueces fallen de manera caprichosa. En efecto, “la ratio decidendi de las sentencias de la Corte Constitucional, en la medida en que se proyecta más allá del caso concreto, tiene fuerza y valor de precedente para todos los jueces en sus decisiones, por lo que*

*puede ser considerada una fuente de derecho que integra la norma constitucional”*⁴ (sentencia SU 068 de 2018).

En consonancia con el argumento antes expuesto, para esta Sala no es posible apartarse de los lineamientos de la sentencia SU 149 de 2021.

En desarrollo de lo anterior, se tiene que la interviniente Sulma Nancy Soto Agudelo, tiene la carga probatoria de acreditar la calidad de compañera permanente y la convivencia efectiva en un periodo mínimo de cinco años con anterioridad a la muerte del señor Luís Obed Gil Giraldo, recordando que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entra otras en la Sentencia SL 1399 del 25 de abril de 2018 (45779), delimitó la convivencia así:

“2.1 La noción de convivencia

...Por convivencia ha entendido la Corte que es aquella «comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado» (CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605).”

En este cometido, se encuentra que, a juicio de este Juez Plural, la decisión adoptada por el fallador de primera instancia resulta acertada, en tanto que la señora Sulma Nancy Soto Agudelo no logra acreditar una convivencia ininterrumpida por un espacio superior a cinco años con el causante, ello atendiendo a lo siguiente:

En la demanda de intervención presentada por la señora Sulma Nancy Soto Agudelo, se indicó en el hecho cuarto “*El señor **LUIS OBED GIRALDO GIL**, convivió en una relación estable en calidad de compañeros permanentes con la señora*

SULMA NANCY SOTO AGUDELO, desde el 18 de septiembre de 2010...”, fecha que fue ratificada al momento de rendir interrogatorio de parte, al manifestar que la convivencia inició en el mes de septiembre de 2010.

Partiendo de lo anterior y toda vez que el señor Luis Obed Giraldo Gil, falleció el 13 de octubre de 2014, se tiene que, en el evento en que la convivencia hubiere sido ininterrumpida como lo afirma el apoderado de la parte interviniente, el término máximo de convivencia entre los mismos, sería de cuatro (4) años, veintiséis (26) días, el cual resulta inferior al mínimo de cinco (5) años exigido por la norma.

Ahora bien, está acreditado, según lo confesó la interviniente y lo declararon los testigos José Nahúm Gil Giraldo y Luz Nélida Atehortúa, que la pareja se separó a mediados de marzo de 2013, con lo cual se interrumpe la convivencia y se pierde el status de compañera permanente, precisando el hecho que no se hubiere efectuado el retiro de la excompañera como beneficiaria en el sistema de salud no es suficiente para considerar la continuidad de la comunidad de vida, aunado a que nada se probó sobre las circunstancias económicas constitutivas de fuerza mayor que se aduce llevaron a la separación, en este escenario es claro que no existía convivencia para el momento del fallecimiento, corolario de lo anterior y sin necesidad de efectuar otros análisis, debe despacharse desfavorablemente el recurso de apelación la interviniente.

De la dependencia económica de la señora Gabriela Giraldo de Gil, madre del causante.

En torno, a este problema jurídico, parte la Sala de la premisa jurídica, que la dependencia económica, como lo determinó la Corte Constitucional en la

sentencia C111 de 2006 y lo ha reiterado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en innumerables fallos, no requiere ser absoluta, véase al respecto las sentencias CSJ SL400 de 2013, SL816 de 2013, SL 2800 de 2014, SL3630 de 2014, SL6690 de 2014, SL14923 de 2014 y SL6390 de 2016, sin que ello signifique, que no sea necesario que exista una relación de sujeción de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo, de manera que si bien pueden percibir ingresos adicionales, estos deberán ser insuficientes para garantizar la independencia económica.

En sentencia SL10251 de 2017, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, recordó que el aporte del causante debe ser de una entidad considerable para configurar dependencia:

“En relación con la acusación presentada en el segundo cargo orientado por la vía directa, en cuanto a la interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en punto al entendimiento que debe darse al requisito de dependencia económica, puede verificarse que la sentencia de segundo grado, admitió que no se exige que la dependencia sea total y absoluta, sino que tenga la connotación de subordinación respecto de otra persona o la necesidad de auxilio o protección de otra”

“Intelección que atiende los planteamientos que sobre este asunto ha sostenido esta Corporación, pues ha sido criterio reiterado, que la dependencia económica se establece en cada caso particular, sin que la misma sea total y absoluta, pues lo que ha de probar es que se derive de una contribución por parte del causante, que se acredite como relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento del demandante, y que pueda configurar subordinación económica que se requiere para adquirir la condición.”

La anterior postura jurídica se itera en sentencia de la misma corporación, SL1243-2019 (68336) del 27 de marzo del 2019, en la que se enfatiza que la dependencia económica no puede comprenderse en términos absolutos, de modo que el hecho de que existan otras contribuciones o rentas en favor de los padres del afiliado fallecido, no excluye su derecho a obtener una pensión

de sobrevivientes, pero tampoco puede entenderse que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del “buen hijo”, siempre sea indicativo de una verdadera dependencia económica:

“Puesto en otros términos, no significa que es cualquier estipendio, ayuda o colaboración que se otorgue a los progenitores, el que tiene la virtualidad de configurar la subordinación económica que se requiere para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, sino aquel que tiene la connotación de ser relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia, en tanto la finalidad prevista por el legislador para obtener la referida prestación, es la de servir de amparo a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba, realmente, a mantener unas condiciones de vida determinadas (CSJ SL18517-2017).

Es por lo anterior, que se ha puntualizado jurisprudencialmente que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del «buen hijo», no siempre es indicativo de una verdadera dependencia económica y, en esta eventualidad, no se cumplirían las previsiones señaladas en la ley...”

Relieva la Sala que la dependencia económica de los padres respecto de los hijos, como lo ha establecido la Corte Constitucional y la Sala Laboral de Corte Suprema de Justicia, debe ser auscultada en cada caso concreto, sin que existan reglas de comprobación general. Igualmente, es un concepto que está vinculado al mínimo vital cualitativo de los padres, de manera que el aporte del hijo, sea determinante para mantener el mismo, con independencia del quantum de los ingresos propios o suministrados por terceros.

En el sublite, analizada la prueba obrante en el plenario, el interrogatorio de parte rendido por la señora Gabriela Giraldo de Gil y la prueba testimonial presentada por esta última, concluye este Juez Plural, que no le asiste razón al alzado al afirmar que se acreditó la dependencia económica parcial, compartiendo esta Sala, la conclusión a la cual arribó el funcionario de primera instancia, lo anterior atendiendo a lo siguiente:

En primer lugar, a juicio de esta Colegiatura, la señora Gabriela Giraldo de Gil, al rendir interrogatorio no fue espontánea, evidenciándose un interés en desconocer la relación y el inicio de la convivencia que su hijo Luis Obed, tuvo con la señora Sulma Nancy Agudelo, convivencia que sí fue reconocida por los testigos José Nahúm Gil Giraldo, hijo de la demandante y la señora Luz Nelida Atehortúa, nuera de la demandante y que precisamente inició en la propia casa de la señora Gabriela Giraldo de Gil, resultando igualmente contrario el dicho de la actora al de los testigos, en relación al lugar donde vivía el causante, pues sostuvo la madre que Luis Obed vivía con ella (Riosucio-Caldas) y que tenía un apartamento en Caldas-Antioquia, donde descansaba, mientras que los testigos, reconocen que para la fecha del fallecimiento, Luis Obed, vivía en Caldas-Antioquia, refiriendo que por lo viajes que hacía y la ruta que cubría que principalmente era a Buenaventura, pasaba por Riosucio, existiendo igualmente contradicción en cuanto a la estructura de la casa en la cual vive la actora, pues la misma para la fecha del fallecimiento de su hija, la describe como una casita humilde, sencilla, mientras que su hijo José Nahúm, manifestó que la casa fue remodelada entre todos los hermanos después de la muerte de su padre en 1994, situación que coincide con la de la interviniente, quien manifestó que la casa tenía unas remodelaciones y se hicieron unos apartamentos.

En relación a la declaración de la señora Inés Edilma Ríos, debe indicarse que la misma no aporta elementos de convicción que respalden las aspiraciones de la actora, pues desde el año 1988 no tiene conocimiento directo de las circunstancias de vida de la actora y su grupo familiar, fecha en la que señala que la señora Gabriela se fue de la vereda Alto San Francisco para Riosucio, siendo una testigo indirecta o de oídas, pues el conocimiento de sus dichos deriva de lo que le comentaba la actora, y así lo reconoció en su declaración, aceptando igualmente que no le consta nada.

Ahora la señora Luz Nelida Atehortua, nuera de la demandante, si bien afirmó vehementemente que era Luis Obed, quien respondía económicamente por su madre, diciendo que le constaba que constantemente Luis Obed le entregaba dinero a la demandante, la fuerza de sus dichos fue desvaneciéndose en el transcurrir de la declaración, pues terminó admitiendo que no era tan constante que pudiera dar fe de la ayuda que le daba el causante a la señora Gabriela Giraldo de Gil, pues ello su conocimiento se reduce a las fechas especiales, oportunidades en las cuales, también los otros hijos de la pretensora le daban detalles y podían darle dinero, de ahí que se confunde la ayuda de Luis Obed, con un detalle entregado en una fecha especial que se estuviera celebrando.

Por su parte, el señor José Nahúm Gil Giraldo, hijo de la demandante, indicó que era su hermano Luis Obed quien respondía por su madre, reconociendo que si bien casi todos los hermanos han aportado en algo a su madre, era Luis el responsable de ella, señalando además que visitaba a su madre junto con su esposa, en días de madre, en diciembre, que no había fechas exclusivas, que como podía ir dos veces al mes, podían demorarse hasta 5 o 6 meses para ir, lo que coincide con los dichos de su esposa Luz Nelida Atehortua, manifestó además, que no sabía cada cuanto Luis Obed le daba dinero a su madre, ni a cuanto ascendía lo que le entregaba, consiguientemente no se prueba la habitualidad en el aporte.

Finalmente, la señora Nelida Atehortua, indicó que la demandante después de enviudar volvió a casarse y que la actora se fue a vivir un tiempo a Pereira con su segundo esposo, sin conocerse en qué periodo, situación que no fue informada por la actora; sobre dicha situación, el señor José Nahúm, indicó que su madre si tuvo un matrimonio, pero que fue muy corto e inexplicablemente pese al vínculo consanguíneo cercano, afirma que no se dio cuenta mucho de eso, desconociéndose realmente el tiempo en que la actora

tuvo convivencia con su segundo esposo y las circunstancias en que se desarrolló dicha relación.

Bajo el contexto referenciado, se tiene que no es posible determinar cuál era el aporte que daba el señor Luis Obed a su madre, ni la periodicidad del mismo, de ahí que no puede concluirse que dicho aporte o colaboración fuera determinante para generar una dependencia económica, relevando, que tampoco se acredita que el causante tuviera un ingreso superior al salario mínimo legal mensual vigente, pues aunque los señores Nelida Atehortúa y el José Nahún Gil, manifestaron que el salario que percibía estaba conformado por el básico de un mínimo y unas comisiones, las mismas no están acreditadas, además que refieren los citados declarantes que dicha comisión era una costumbre en el gremio de los transportadores de mulas, es decir, tampoco tienen certeza adicional de sus dichos, no estando tampoco acreditado el tiempo que llevaba el causante en ese trabajo.

En adición a lo anterior, resulta importante señalar que tanto la testigo presentada por la interviniente, Patricia Elena Morano, como los señores Nelida Atehortúa y José Nahún, dieron fe que el causante en algún periodo, esto es, entre los años 2011 y 2012, convivió con la señora Sulma Nancy Soto Agudelo y que era la persona que económicamente velaba por la señora Sulma Nancy Soto Agudelo, situación que también presenta una gran incidencia de cara a las posibilidades que hubiera podido tener el causante para asumir su propia manutención y el sostenimiento de su madre.

Debe señalarse que la dependencia económica, supone un criterio de necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido por parte del causante, de manera que el mismo se convierta en imprescindible para asegurar la subsistencia y si bien, no es requisito sine qua non, determinar el monto del aporte, ello resulta necesario cuando, como en este caso, no se acredita la

capacidad económica del causante, y además se declara que al aporte del mismo, se sumaban otros ingresos propios y de terceros.

Lo anterior, por cuanto se reitera, los testigos presentados por la activa, dan cuenta de los aportes que, ocasionalmente, al igual que Luis Obed, daban los otros hijos a la demandante, además que se acreditó que la misma tuvo una tienda, de la cual también deriva algunos ingresos.

Tampoco puede desconocerse que, de la prueba documental arribada al plenario, se extrae que a raíz de la sucesión adelantada con ocasión del fallecimiento del señor José Naun Gil Largo, primer esposo de la demandante, la señora Gabriela Giraldo de Gil, ostenta la titularidad de seis (6) bienes inmuebles, propiedad que comparte con sus seis (6) hijos, los cuales se describen a continuación:

-Matricula N° 115-130016, lote de terreno mejorado con plátano y café, ubicado en el municipio de Supía –Caldas, vereda el contenido, folio 203-204.

-Matricula N° 115-10873, lote de terreno mejorado con casa de habitación de una extensión de nueve metros con sesenta ctms, de frente 9.60 por veintidós 22.00 metros centro, y un salón para negocio de una extensión de tres metros por seis metros de ángulo, de cuatro por cuatro (sic), ubicado en el municipio de Riosucio, vereda Tumbabarreto, folio 205 a 207.

-Matricula N° 115-13012, lote de terreno de una extensión aproximada de 19 hectáreas, cultivada en café, plátano, un potrero y casa de habitación construida en material con sus servicios de agua, luz eléctrica y montajes para beneficiadora de café y elaboración de panela, ubicada en la vereda Alto San Francisco municipio de Supía, folios 209 a 210.

-Matricula N° 115-13013, lote de mejoras en terrenos de la nación o del municipio de Supía, consistentes en café y caña, ubicado en el municipio de Supía, vereda Pirgura, folios 211 a 212.

-Matricula N° 115-13014, Lote de terreno mejorado con café y plátano, vereda San Francisco del municipio de Supía, folios 213 a 214.

-Matrícula N° 115-13015, lote de terreno mejorado con casa de habitación, café y plátano, ubicado en la vereda San Francisco, municipio de Supía, folios 215 a 216.

En los testimonios de la pasiva y en el interrogatorio de parte rendido por la actora, se afirma que el inmueble con matrícula N° 115-10873, corresponde al lugar en el cual reside la demandante y el inmueble con matrícula N° 115-13012, corresponde a un lote que según las declaraciones fue vendido por el señor José Naun Gil Largo, en el año 1988, el cual no les terminaron de pagar y respecto al cual el comprador no quiso legalizar la compra, por lo que todavía aparece a su nombre, sin que se tenga su dominio o disfrute, situación que no quedó acreditada en el proceso, pues si bien se aportó copia fraccionada de la promesa de compraventa no obra en el cartulario ningún medio de prueba que acredite la posesión por parte del promitente comprador no obstante, si se tuviera como un hecho cierto la venta del referido inmueble se tiene que nada se indicó en relación a los cuatro (4) bienes restantes, por lo que no acoge la Sala, el argumento del apoderada de la accionante, en tanto esta prueba sí resulta indiciaria de que la progenitora posee los cinco bienes referenciados, con cultivos agrícolas, los que se infiere, razonablemente, deben generarle ingresos.

Colofón de lo anterior, analizada la prueba en su conjunto no es posible establecer la dependencia económica parcial, que exige el artículo 47 de la Ley

100 de 1993 y en razón de ello, la providencia de primera instancia debe ser confirmada, no siendo posible acoger los reparos de la alzada, destacando que el profesional del derecho reprocha la sentencia por apoyarse en indicios y supuestos, no obstante, se apoya en su disenso en premisas que no quedaron acreditadas.

Finalmente, respecto de la inconformidad planteada por el apoderado de la interviniente en relación a la condena en costas, se infiere que la misma estriba en el quantum de la condena, aspecto que no es posible revisar en esta oportunidad procesal, atendiendo lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y de la interviniente, en atención a la no prosperidad de los recursos de alzada. Inclúyase como agencias en derecho la suma de \$1.160.000, correspondiendo a cada parte asumir, la suma de \$580.000.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:


1.- Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, el 8 de septiembre del 2022, en el proceso ordinario instaurado por la señora **GABRIELA GIRALDO DE GIL** en contra de **COLMENA SEGUROS S.A.**, proceso en el cual actuó como interviniente la señora **SULMA NANCY SOTO AGUDELO**.

2.- **COSTAS** en esta instancia a cargo de la parte demandante y de la interviniente. Inclúyase como agencias en derecho la suma de \$1.160.000, correspondiendo a cada parte asumir, la suma de \$580.000.

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

(Sin firma por ausencia justificada)